



NUESTRA AMÉRICA

Brasil sin oxígeno

ANDREA ÁVILA SERRANO

DOCTORANDA EN CIENCIA POLÍTICA

UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS (BRASIL)

El pasado primero de enero el gobierno Bolsonaro llegó a la mitad de su mandato en medio de un contexto en el que confluyeron desde la profundización de la crisis sanitaria y económica que golpea con mayor rigor a los grupos históricamente marginados, pasando por un nuevo escándalo por manejos irregulares de gastos públicos, hasta la necesidad inaplazable de concretizar una nueva alianza política que le permita mantenerse en el poder, lo cual se erige como una buena ilustración del tipo de proyecto político de clase que representa.

83

I.

Para iniciar, la situación relacionada con la pandemia no podría ser más lamentable. Tan solo una semana después de iniciado el año el número de personas fallecidas por covid-19 en Brasil superaba los 200 mil y, simultáneamente, el país entraba en su segunda ola de contagios. Frente a ese panorama la respuesta del ejecutivo fue mantener, en términos prácticos¹, la postura negacionista que ha sostenido desde el inicio y con base en la cual no solo se niega a implementar cualquier medida orientada a contener la propagación del virus sino que, por el contrario, promueve el desacato de las directrices de bioseguridad² y restringe las políticas que se ha visto obligado a aplicar, como es el caso del programa de *auxilio de emergencia*³, el cual busca

- 1 Discursivamente, algunos miembros del gobierno y el propio Jair Bolsonaro hicieron un par de declaraciones reconociendo, aunque tímidamente, la gravedad de la situación.
- 2 De forma recurrente Bolsonaro se presenta en público sin tapabocas y generando aglomeraciones.
- 3 El *auxilio de emergencia* fue aprobado por el Congreso en marzo de 2020 con el fin de asegurar un ingreso mínimo para les trabajadoras/es informales e independientes, desempleados y beneficiarios del programa “Bolsa Familia” durante el tiempo que durase la pandemia y con ello intentar atenuar los

La situación relacionada con la pandemia no podría ser más lamentable. Tan solo una semana después de iniciado el año el número de personas fallecidas por covid-19 en Brasil superaba los 200 mil y, simultáneamente, el país entraba en su segunda ola de contagios. Frente a ese panorama la respuesta del ejecutivo fue mantener, en términos prácticos, la postura negacionista que ha sostenido desde el inicio y con base en la cual no solo se niega a implementar cualquier medida orientada a contener la propagación del virus sino que, por el contrario, promueve el desacato de las directrices de bioseguridad y restringe las políticas que se ha visto obligado a aplicar, como es el caso del programa de *auxilio de emergencia*.

posibilitar que la población más empobrecida y vulnerable pueda atender las disposiciones de cuarentena impuestas en la mayoría de las ciudades. El desmantelamiento del auxilio comenzó en septiembre, luego de seis meses de su entrada en vigencia, cuando su valor fue reducido a la mitad (pasando de 600 a 300 reales mensuales, equivalentes a 120 y 60 dólares respectivamente) y culminó en diciembre con el anuncio de su cierre definitivo⁴, aduciendo falta de recursos en el presupuesto federal para darle continuidad, una supuesta reactivación de la economía y el descarte de un nuevo pico⁵ de contagios, lo que presionó el retorno a las actividades económicas de estos segmentos poblacionales y el consecuente aumento de su exposición al coronavirus. Así, no fue una sorpresa que durante todo el mes de enero y la primera quincena de febrero los nuevos casos de covid-19 alcanzaran un promedio diario de 50.000 y 1.000 el de muertes, resultando en una alarmante cifra total de casi diez millones de contagiados y cerca de 240 mil fallecimientos a pocos días de cumplirse un año del primer caso registrado. Este cuadro fue tristemente complementado con los avisos de escasez de oxígeno en los hospitales y el colapso del sistema de salud

de la ciudad amazónica de Manaus, impidiendo de esta forma la atención de muchos pacientes con síntomas graves de coronavirus, cuyo desenlace fue fatal. Ante esta crisis Bolsonaro afirmó que el Gobierno Federal "hizo más de lo que está obligado"⁶ porque no es competencia suya sino del Gobierno Estadual proveer insumos médicos, mostrando su habitual falta de un mínimo de empatía respecto de la tragedia que se vive en la zona. La ayuda provino entonces de otros Estados que enviaron oxígeno y recibieron pacientes, de parte de la sociedad civil que a lo largo del país se movilizó para recaudar dinero para comprar oxígeno a empresas privadas y del Gobierno de Venezuela

efectos económicos que sobre esta población tuviesen las cuarentenas impuestas por alcaldes/as y gobernadores/as.

- 4 Actualmente se discute tanto en el Gobierno Federal como en el Congreso y los gobiernos locales el retorno del pago del auxilio.
- 5 Como fue explícitamente declarado por el Ministro de Economía Paulo Guedes. Véase: <https://www.brasil247.com/economia/guedes-descarta-agravamento-da-pandemia-de-covid-19-e-reforca-fim-do-auxilio-emergencial>
- 6 <https://www1.folha.uol.com.br/eqilibrioesaude/2021/01/fomos-alem-do-que-somos-obrigados-a-fazer-diz-bolsonaro-sobre-falta-de-oxigenio-em-manaus.shtml>



<http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2021/02/stopbolso2.jpg>

que también hizo llegar dos cargamentos con miles de litros de oxígeno tanto al Estado de Amazonas como al de Roraima con quienes posee frontera. Es importante recordar que justamente Manaus fue uno de los lugares más afectados por la primera ola de la pandemia y que concentra un número alto de población indígena.

Adicionalmente, el Ejecutivo ha adelantado gestiones mínimas e infructuosas con respecto al proceso de vacunación, el cual, sin embargo, se inició el pasado 17 de enero, pero, bajo el liderazgo del Gobernador del Estado de São Paulo João Doria.

II.

Lo anterior se suma al hecho de que, desde diciembre, el Gobierno Federal ha promovido paralelamente una serie de directrices orientadas a incrementar la flexibilización de la legislación relacionada con la posesión y porte de armas por parte de la ciudadanía⁷, y con el anuncio de la presentación ante el legislativo del proyecto de ley que excluiría de responsabilidad a policías y militares por “posibles excesos” cometidos en operaciones de seguridad -llamada por sus críticos ley de “licencia para matar”- en cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña. Con ello ha profundizado y extendido la percepción de que aquello que se está

⁷ Las adoptadas hasta ese momento tuvieron como resultado el aumento en un 90% del registro de armas en manos de civiles durante el 2020 con respecto a 2019. <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/01/11/numero-de-novos-registros-de-armas-de-fogo-no-brasil-aumenta-90percent-em-2020.ghtml>

implementando desde el ejecutivo es una política abiertamente genocida contra las gentes de las clases populares e históricamente oprimidas, como las negritudes, los indígenas y las personas LGBTIQ+, en tanto son estas poblaciones las principales víctimas tanto de la pandemia como de los abusos de las fuerzas armadas y de los asesinatos por arma de fuego.

Dicha percepción aumentó aún más cuando a finales de enero un portal de noticias reveló un informe que mostraba que el Gobierno Federal había gastado en 2020 1,8 billones de reales (equivalentes a 330 millones de dólares) en alimentos destinados a sus diferentes carteras, por ejemplo, los ministerios de Defensa y Educación, que incluyen compras por miles de reales de artículos como leche condensada, chicles, pizza y vino, entre otros⁸, en el mismo momento en que se dejaba de pagar el mencionado *auxilio de emergencia* bajo la excusa de falta de recursos en las arcas del ejecutivo, lo cual generó una profunda indignación no solo entre opositores, sino, igualmente, entre (antiguos) aliados y simpatizantes del gobierno.

Las posibles salidas para Brasil de este nefasto contexto no provendrán del ámbito institucional sino de la lucha popular, la cual se ha venido fortaleciendo durante el último año de manera paulatina, aunque fragmentada, pese a la pandemia. Movilizaciones y huelgas de diversos sectores de la sociedad contra el autoritarismo y el neoliberalismo y a favor de la democracia evidencian un hastío social que requiere ser encaminado hacia la organización popular y comunal con miras a darle una vuelta de tuerca al contexto político y social que, en lo inmediato, les dé un respiro a las clases subalternas para que puedan mantener sus luchas con largo aliento.

III.

La consecuencia inmediata del anterior proceso ha sido la disminución en los índices de aprobación de Bolsonaro -que habían presentado una leve recuperación a mediados del año pasado como resultado del pago del *auxilio emergencial*- y el incremento del número de solicitudes de *impeachment* en su contra, que ya suman más de 70. Ello obligó al Gobierno a sellar un nuevo pacto con una coalición de partidos políticos de centro y centroderecha conocido en Brasil como "Centrão" (centrazo) de cara a la elección de los presidentes de la Cámara y el Senado y que rindió los frutos esperados al lograr el nombramiento en ambas corporaciones de los candidatos apoyados por el ejecutivo, Arthur Lira del Partido Progresista (PP) -líder del Centrão- y Rodrigo Pacheco del Demócratas (DEM), respectivamente.

Es claro que para el Gobierno esta alianza resulta indispensable para mantenerse en el poder y asegurar su gobernabilidad. Por un lado, contar con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, en particular,

8 <https://www.metropoles.com/brasil/mais-de-r-18-bilhao-em-compras-carrinho-do-governo-federal-tem-de-sagu-a-chicletes>.



asegura la dilación en el inicio de los trámites correspondientes a los pedidos de juicio político. ya que son responsabilidad de este -como sucedió hasta ahora con el saliente presidente Rodrigo Maia (DEM)-. De otro, el Ejecutivo requiere de mayorías en el legislativo tanto para que, en caso de comenzarse un *impeachment*, este no sea ratificado, como para que sean aprobadas las distintas políticas y leyes que el Gobierno le propondrá al Parlamento, muchas de ellas reformas económicas neoliberales de corte ortodoxo que se encuentran pausadas por la pandemia.

Para el Centrão, además de las respectivas cuotas burocráticas y los recursos para enmiendas parlamentarias, los beneficios de la coalición están en afianzarse dentro de las estructuras de poder institucional en un momento en que se lleva a cabo una disputa dentro del bloque de poder de la clase dominante -no solo entre la centroderecha y la ultraderecha, sino también en el mismo campo de la centroderecha, que se ha dividido- mientras observa, desde ya, el espacio político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, con el objetivo de cerrar cualquier opción electoral para la centroizquierda y la izquierda, y asegurar así la preservación del poder dentro del mencionado bloque, pero para un número reducido de partidos en coalición. Y es que la gestión de la pandemia ha inclinado la balanza a favor de la centroderecha liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) y el Movimiento Democrático Brasileiro (MDB) en cabeza de João Doria⁹, quien, como ya se mencionó, al capitanear el proceso de vacunación en el país (y antes en la implementación de cuarentenas) presenta un discurso aparentemente “alternativo” al de Bolsonaro, pero dentro del mismo espectro de la derecha, que le ha otorgado visibilidad nacional y al que se ha sumado una parte representativa del DEM, incluyendo a Maia; llevando al otro grupo de la centroderecha, guiado por Lira, a mantener su alianza con el bolsonarismo.

IV.

Esta limitada reconfiguración actual del campo político brasileiro comenzó a dilucidarse en las elecciones regionales realizadas en octubre y noviembre pasados, en las que la centroderecha fue la gran ganadora en cuanto bloque, mientras la línea dura del bolsonarismo la gran derrotada. La pérdida de capital electoral es otra razón por la que el ejecutivo necesita establecer alianzas con los sectores más a la derecha del Centrão. Pese a ello, sería una equivocación pensar que este hecho significa que el Gobierno haya perdido *-de facto-* poder. La misma constitución de la coalición con el Centrão y la reciente aprobación del proyecto de ley que le otorga autonomía al Banco Central, medida que llevaba 30 años esperando ser aprobada, demuestran que sus recursos institucionales

9 Esta disputa ha tenido, incluso, repercusiones internacionales, al punto que Doria fue invitado en enero a hablar sobre la vacunación en representación de Brasil en uno de los paneles del Foro Económico Mundial, mientras que Bolsonaro no participa del mismo por segundo año consecutivo.



https://www.publico.es/files/module_big_mobile/files/crop/uploads/2020/05/30/5ed22ddcb7d82.r_1591211952205_421-0-2081-931.jpeg

(financieros y burocráticos) y los apoyos políticos que conserva (de sectores de los militares, banqueros, latifundistas y ganaderos) siguen siendo medios efectivos poder, aún más si se tiene en cuenta que tanto el rechazo popular como el diplomático hacia el ejecutivo se encuentran en ascenso.

Por su parte, el DEM fue el vencedor como partido, posibilitando su distanciamiento del Gobierno y el acercamiento al PSDB que, si bien perdió también en términos generales, se consolidó en el Estado de São Paulo. Igualmente, la centroizquierda perdió bastante espacio político y la izquierda, aunque logró hacerse más visible y amplió su capital electoral, no pudo concretar la mayoría de sus aspiraciones a las alcaldías, mostrando que se afianza ese movimiento hacia el cierre del campo político bajo el dominio del bloque en el poder.

V.

De esta forma se hace evidente que las posibles salidas para Brasil de este nefasto contexto no provendrán del ámbito institucional sino de la lucha popular, la cual se ha venido fortaleciendo durante el último año de manera paulatina, aunque fragmentada, pese a la pandemia. Movilizaciones y huelgas de diversos sectores de la sociedad contra el autoritarismo y el neoliberalismo y a favor de la democracia evidencian un hastío social que requiere ser encaminado hacia la organización popular y comunal con miras a darle una vuelta de tuerca al contexto político y social que, en lo inmediato, les dé un respiro a las clases subalternas para que puedan mantener sus luchas con largo aliento.